MINISTERIO
DE POLÍTICA
TERRITORIAL

GABINETE
DE PRENSA

Intervención del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial Desayunos Informativos de Cinco Días

Madrid, abril de 2010

Permítanme, en primer lugar, que les agradezca su invitación a participar en este prestigioso foro de información y análisis de la realidad española, especialmente en su vertiente económica.

En estos tiempos de cambio, tan proclives a la desorientación e incluso a la confusión, lugares de encuentro como éste son imprescindibles para avanzar en la puesta en común de los diagnósticos y para el conocimiento más preciso de las propuestas de los distintos actores políticos, económicos, empresariales o sociales con responsabilidad en el escenario de nuestro país.

Hace 15 días se cumplieron dos años de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero en su segundo mandato como presidente del Gobierno de España. Han sido dos años particularmente intensos, caracterizados por las consecuencias de la peor crisis económica registrada en el mundo en los últimos 80 años.

Una crisis, una gran recesión, como la ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, cuyas devastadoras consecuencias están a la vista: bajo crecimiento, grave aumento del endeudamiento público, y elevadas tasas de desempleo. En todo caso, continúa habiendo turbulencias muy fuertes como viene ocurriendo desde hace semanas en torno a la situación de Grecia, fundamentadas, en parte, en razones objetivas, pero en las que existe, también, e indudablemente, un componente especulativo.

En este sentido, debo decir que, para el Gobierno de España, ayudar a la estabilización de Grecia no es una cuestión de solidaridad, sino de responsabilidad. La Unión Europea debe cumplir con su obligación de hacer frente a los movimientos especulativos que se han producido en estas últimas semanas y no debe dejar caer a una de las economías de la zona euro. Si así fuera, el mensaje sería demoledor, no sólo ante los mercados, sino también ante aquellas potencias que han de compartir con Europa su condición de actor global en la configuración del nuevo orden internacional que se está fraguando.

Desde el Gobierno de España lo tenemos claro: contribuiremos a esa ayuda en la cuota parte que nos toca. Porque debemos hacerlo y porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque la economía española, por más que haya atravesado, en este tiempo, momentos muy duros, tiene unas fortalezas innegables.

Fortalezas que, por cierto, el Partido Popular, que se supone que es un partido de Gobierno, conoce muy bien, por lo que son francamente inaceptables determinados pronunciamientos de dirigentes del PP que, desde la frivolidad, ayudan muy poco a su país y a su imagen ante los mercados financieros.

Ante la crisis, el Gobierno en ningún momento se ha quedado quieto, sino que la ha afrontado con decisión. Desde el primer momento, el Gobierno de España asumió la responsabilidad de responder con medidas y con iniciativas a cada reto y, a la vez, de marcar

el rumbo de las reformas que nos deberán permitir sustentar nuestra economía en bases más firmes, más seguras y más productivas.

Cuatro han sido las grandes líneas de actuación del Gobierno.

En primer lugar, la actuación del Gobierno se centró en impedir un colapso financiero que hubiera tenido consecuencias absolutamente catastróficas, fortaleciendo la solvencia y la liquidez de nuestro sistema bancario y garantizando los ahorros de los ciudadanos y procurando facilitar el crédito a las empresas.

En segundo lugar, y en esta primera fase de la lucha contra la crisis, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas de estímulo de la economía y el empleo, movilizando un ingente volumen de recursos públicos, con el objetivo de paliar las consecuencias más negativas de la crisis, especialmente en lo que se refiere a la destrucción de empleo.

Al mismo tiempo, una tercera línea de actuación ha ido encaminada a fortalecer la acción protectora del Estado dirigida hacia aquellos colectivos que más duramente sufrían los embates de la crisis, y me refiero singularmente a los desempleados. Una acción social que, sin duda, ha producido un aumento del gasto público y, por tanto, del déficit, pero que, al mismo tiempo, ha evitado una fractura social que hubiera tenido consecuencias imprevisibles y, en todo caso, indeseables.

Y una cuarta línea de actuación es la relativa a la puesta en marcha de las reformas que propicien un cambio en el modelo económico para hacerlo más sólido y más sostenible en todos los terrenos.

Porque no hay ninguna duda de que esta situación de crisis ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo económico y la necesidad de avanzar hacia otro más sostenible, capaz de afrontar retos tan importantes como la competitividad en un escenario económico globalizado, el envejecimiento de la población, el empleo juvenil o el cambio climático. Ése es el gran reto que tenemos y en ello está trabajando el Gobierno en todos los frentes.

El primero de ellos es la consolidación fiscal, con la consiguiente reducción del déficit público. De aquí a 2013 tenemos que hacer una reducción equivalente a 8 puntos del PIB, un esfuerzo, sin duda, muy importante. El Gobierno ya ha empezado a tomar las medidas para conseguirlo, con medidas no precisamente populares, como la subida de impuestos o la reducción del gasto público, mediante el Plan de Austeridad.

Por otra parte, las comunidades autónomas y las corporaciones locales van a asumir un compromiso de reducción del déficit de un punto desde 2010 hasta 2013, según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local. En este sentido, me gustaría hacer un comentario sobre el papel de las Comunidades Autónomas.

Es evidente que, con la actual distribución del gasto que hay en España (y de otras magnitudes, como el empleo público), las Comunidades y los Ayuntamientos tienen que comprometerse a reducir el déficit y tomar conciencia de que la salida a la crisis pasa por la cooperación entre todas las Administraciones.

Dicho esto, esa cooperación y colaboración no puede abordarse desde el tópico que presenta a las CCAA como unas derrochadoras. La verdad es que da la impresión de que en el río revuelto de la crisis, muchos quieren pescar y desatar sus demonios familiares contra el Estado de las autonomías, presentándolo como un Estado ineficaz y derrochador.

Esto no es nuevo y es un discurso que algunos vienen repitiendo a lo largo de los últimos 30 años, frente a la evidencia de que el gran salto de modernización y de prosperidad en todos los órdenes que ha vivido España es indisociable del éxito político, social y económico que ha supuesto el Estado de las autonomías.

Independientemente de que siempre se pueda y se deba mejorar, hay que ser conscientes de que la naturaleza del gasto que afrontan las CCAA es muy distinta a la del Estado Central, particularmente en lo que se refiere a la elasticidad de la demanda que afrontan las CCAA.

Cuando hay más población escolar hay, o población mayor o inmigrante o se introducen nuevas prestaciones médicas derivadas del propio avance tecnológico, las CCAA difícilmente pueden dejar de atenderlas y eso tiene, inevitablemente, su repercusión en el gasto. No obstante, hay que seguir profundizando en los mecanismos de cooperación y de mejora de la eficiencia. El reciente pacto en materia de gasto farmacéutico, que va a suponer un ahorro de 1.500 millones de euros anuales, es una prueba de que el Gobierno impulsa esta cooperación y también de que es posible conseguir acuerdos beneficiosos para todos.

Señoras y señores

Favorecer los cambios en el modelo económico implica necesariamente una estrategia de reformas. Esas reformas están diseñadas en la Estrategia de Economía sostenible, que es la hoja de ruta del Gobierno para propiciar esos cambios. Una de ellas, claro está, es la propia ley de Economía Sostenible, en este momento en el Congreso.

Todas estas actuaciones reformistas del Gobierno tienen como denominador común el intento de conseguir el máximo consenso político y social. En efecto, el Gobierno siempre ha considerado que lo mejor para salir de la crisis es avanzar a base de acuerdos.

Es verdad que no todos piensan así, y ya hemos visto lo que ha ocurrido en torno a los llamados pactos de Zurbano. Ha habido un proceso de debate, de presentación y discusión de propuestas y el resultado es conocido: no ha habido foto del acuerdo, pero ha habido acuerdo. Para algunos lo importante parece ser que era que no se escenificara el acuerdo; para nosotros, por el contrario, lo importante era conseguir que esa treintena de medidas pudiera aprobarse cuanto antes y con el mayor consenso.

En el marco de esa política de acuerdos vamos a abordar dos temas importantes, la estrategia industrial y la energética, en los que queremos contar con los partidos políticos de la oposición y con las Comunidades Autónomas.

El sector privado no debe quedar fuera de esa política de acuerdos y, en ese sentido, quiero destacar el Plan de Colaboración público privada para el desarrollo de las infraestructuras de transporte que nos va a permitir movilizar 17.000 millones de euros en inversión hasta 2013, sin que esa inversión afecte al déficit público en ese período.

En la misma línea de diálogo para las reformas hay que entender otras grandes iniciativas del Gobierno que actualmente están en pleno proceso de discusión.

Me refiero, en primer lugar, a la reforma de nuestro sistema de pensiones, que debe adaptarse a los cambios demográficos, precisamente para garantizar su sostenibilidad.

En segundo lugar, a la reforma laboral, una reforma necesaria para la que hemos presentado una propuesta con la que queremos dar solución a uno de los problemas estructurales más graves del mercado de trabajo en España, que es la dualidad que existe entre trabajadores fijos y temporales.

La propuesta del Gobierno es ciertamente innovadora, por cuanto se trata, también, de reducir costes laborales para las empresas, sin que ello suponga ninguna merma de los derechos de los trabajadores. Probablemente, la solución habrá de venir por una distribución de una parte de esos costes, especialmente a lo largo del tiempo. Por otra parte, el Gobierno ha propuesto también medidas para favorecer el empleo de los jóvenes, y hemos sugerido cambios significativos en los mecanismos de intermediación laboral.

En tercer lugar, la reforma educativa. El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, viene trabajando desde hace tiempo para intentar alcanzar un gran Pacto social y político por la Educación. Un pacto que tiene una finalidad clara: facilitar al conjunto de la sociedad española un horizonte de estabilidad para años, en los planes educativos, con independencia del partido que gobierne en España.

Y, por último, el Gobierno trabaja en la definición de un nuevo marco jurídico y financiero para las corporaciones locales españolas. Nuestro compromiso es que los Ayuntamientos que surjan de las elecciones del 22 de mayo del año próximo cuenten con ese nuevo y modernizado marco de referencia para que puedan cumplir sus obligaciones en las mejores condiciones.

Como se puede comprobar, el Gobierno es plenamente consecuente con la idea de que el diálogo político, social e institucional es el mejor instrumento para avanzar en una sociedad democrática. En realidad, el diálogo y el acuerdo no sólo son un imperativo democrático, sino una condición de eficacia de la acción del Gobierno.

El resultado de esa apuesta por el diálogo es que se está forjando toda una tupida red de pactos que conciernen a los más diversos espacios de nuestra geografía política, económica, social y territorial.

Señoras y señores, antes de terminar, me gustaría decir unas palabras sobre otros asuntos que forman parte de la actualidad en estos últimos días. Me refiero a las opiniones aparecidas en torno al Tribunal Supremo y el Constitucional.

Empezaré por afirmar que tanto uno como otro son piedras angulares, o claves de bóveda de nuestro entramado jurídico y constitucional. Esa consideración debe tener un correlato inmediato: el máximo respeto a su funcionamiento y a sus decisiones. Ésa es la posición del

Gobierno. En concreto, y en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, deberíamos dejarlo trabajar con normalidad. Es cierto que su falta de renovación constituye, sin duda, una anomalía, y que es responsabilidad de los partidos políticos subsanarla. Pero, renovado, o no, nadie debe poner en cuestión la plena legitimidad del Tribunal Constitucional.

Respeto también para el Tribunal Supremo, cuando ha decidido encausar al juez Garzón. Me lo habrán podido escuchar en más una ocasión, incluso en sede parlamentaria: no tengo ninguna duda de que, en este caso, como en todos los demás, el Supremo actúa conforme a derecho. Ahora bien, esa consideración de respeto a la institución judicial no puede ser óbice ni obstáculo para poner de relieve algo que, por lo demás, es evidente: es lógico que esa decisión sea polémica para muchos ciudadanos. El respeto a una institución no es nada incompatible, en una sociedad madura como la española, con las muestras pacíficas de la discrepancia.

Ahora bien, cuando el Partido Popular dice que estas muestras de discrepancia son, nada menos, que un peligro y un atentado a la democracia, no sólo está sobreactuando sino que demuestra en este tema, como en tantos otros, su capacidad, verdaderamente asombrosa, para utilizar dos varas de medir, según le cuadre a sus intereses.

En efecto, los dirigentes del partido Popular se escandalizan y se rasgan las vestiduras, precisamente ellos, que llevan meses y meses acusando, sin ninguna prueba y sin ningún pudor, a jueces, fiscales y policías, nada menos que de una conspiración para acosar y para acabar con el Partido Popular.

Termino ya, señoras y señores, transmitiéndoles mi convicción de que, en este momento, cuando encaramos la segunda parte de la legislatura, todo indica que estamos ya adentrándonos en una nueva etapa. Una etapa que va a estar caracterizada por la recuperación económica y también por una mejora del ambiente político en relación con el Gobierno.

Hay toda una serie de datos económicos que confirman que la economía española está entrando en esa nueva etapa: el crecimiento del consumo eléctrico; el aumento de la matriculación de vehículos, de los créditos hipotecarios o de la compraventa de viviendas; el incremento del turismo; la subida por primera vez en dos años en la recaudación de las arcas públicas; y, en general, un cierta mejora de la confianza de empresarios y consumidores.

Creo que, a estas alturas, empieza a existir la conciencia bastante clara, no sólo de que lo peor ya quedó atrás hace tiempo, sino de que hemos entrado en un momento de recuperación.

Creo que hay razones para afirmar que estamos también ante un ambiente que se va tornando más favorable para el Gobierno y el partido que lo sustenta, así como un fortalecimiento de su credibilidad.

Tengo la convicción de que el Gobierno, a lo largo de estos dos años tan difíciles, sin que eso signifique que no se haya podido cometer tal o cual error, ha hecho lo que le correspondía hacer.

Es probable que, en todo este tiempo pasado, muchos ciudadanos no lo vieran así y creo que es bastante lógico, teniendo en cuenta que los efectos de la crisis han sido verdaderamente abrumadores. Es normal que el impacto tremendo de esos efectos lo haya tapado todo, incluyendo los esfuerzos que haya hecho y los aciertos que haya podido tener el Gobierno. Y es normal, también, que las reformas en marcha hayan tenido dificultades para ser percibidas a corto plazo por la ciudadanía, y sólo se terminen viendo sus resultados.

Hoy las cosas han empezado a cambiar. De muchas medidas se puede medir ya el resultado positivo. De otras los veremos a muy corto plazo. El Gobierno lleva plenamente la iniciativa: impulsa reformas en todos los campos, propone acuerdos, lidera el diálogo y consigue sacar adelante sus iniciativas con un amplio consenso.

Por el contrario, a la hora de proponer y de colaborar en las alternativas contra la crisis, al principal partido de la oposición, ni está ni se le espera, de manera que muchos ciudadanos tienen derecho a preguntarse ¿Qué ha hecho el PP para ayudar a salir de la crisis?

En conclusión, seguimos teniendo problemas, vamos a seguir atravesando momentos difíciles, pero las cosas van mejor. Mejor para España y, en consecuencia, mejor para el Gobierno, porque, nosotros, sí, unimos nuestro éxito al del país y al de sus ciudadanos.